



RESOLUCIÓN No. 078 de 2019

(14 de mayo de 2019)

“Por medio de la cual se declara la prescripción de la acción de cobro administrativo coactivo respecto de la obligación a cargo de JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 74.302.184 y se declara la terminación del proceso No. 2009-175”

LA FUNCIONARIA EJECUTORA DE LA REGIONAL BOYACÁ DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF”

En uso de las facultades conferidas por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, artículo 98 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el libro V título VIII del Estatuto Tributario, la Resolución 384 del 11 de febrero de 2008 emanada de la Dirección General del ICBF, la Resolución 2934 del 2009 y la Resolución 2278 de 11 de octubre de 2017 mediante la cual se designa como funcionario ejecutor de la Regional Boyacá a un servidor público y, de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Que el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Viterbo, mediante sentencia de fecha 25 de febrero de 2009, ordenó al señor JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 74.302.184, reembolsar los gastos en que incurrió el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR al practicar la prueba de ADN ordenada en el proceso de investigación de paternidad No. 2008-0023¹.

Que se libró mandamiento de pago contra JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN mediante Resolución No. 49 de fecha 12 de septiembre de 2012 por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE correspondiente al capital y adicionalmente por los intereses moratorios².

Que mediante oficios radicados bajo los números 011640 y 011645 de 23 de septiembre de 2009, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo y al Instituto de Tránsito de Boyacá, información referente a si el deudor se encontraba registrado como propietario de bienes muebles e inmuebles³.

Que mediante oficio radicado bajo el No. 011678 de 23 de septiembre de 2009, enviado por correo certificado, se solicitó a Banco de Bogotá, el embargo de los dineros de las cuentas en que el ejecutado fuera titular⁴.

Que el día 22 de septiembre de 2009, se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó una cuenta bancaria del deudor en estado inactiva⁵.

Que reposa en el expediente memorando radicado bajo el número 011614 de 22 de septiembre de 2009, por medio del cual se remitió al Grupo Financiero auto por medio del cual se avocó conocimiento de la obligación a cargo del deudor⁶.

¹ Folios 1 a 11

² Folio 15

³ Folios 16 a 17

⁴ Folio 18

⁵ Folio 19

⁶ Folio 20

Que el mandamiento de pago fue notificado por aviso al deudor en el diario el Nuevo Siglo el día 31 de diciembre de 2013⁷.

Que el día 15 de mayo de 2014, se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó "no registra información en CIFIN"⁸.

Que el día 14 de noviembre de 2014, se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó "no registra información en CIFIN"⁹.

Que mediante Auto No. 007 de fecha 24 de julio de 2015, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá y CIFIN¹⁰.

Que mediante oficio radicado bajo el No. S-2015-322154-1500 de fecha 20 de agosto de 2015, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, información referente a si el deudor se encontraba registrado como propietario de bienes inmuebles, sin que repose en el expediente certificado de tradición del deudor¹¹.

Que mediante Resolución No. 092 de fecha 04 de noviembre de 2015, se dictó sentencia ordenando seguir adelante la ejecución contra JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE de capital, más los intereses moratorios y las costas procesales que se ocasionaran¹².

Que el día 26 de mayo de 2016 se realizó consulta en CIFIN¹³.

Que mediante Auto No. 005 de fecha 17 de noviembre de 2016, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, y CIFIN y se libraron los respectivos oficios a las entidades referenciadas, sin evidenciar bienes de propiedad del deudor¹⁴.

Que mediante Auto No. 070 de fecha 23 de marzo de 2018, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, y CIFIN¹⁵.

Que se realizó consulta en RUES – Registro único empresarial y social cámaras de comercio sobre información de registro mercantil en las cámaras de comercio del deudor, sin que retornara resultado alguno¹⁶.

Que con oficio radicado bajo el número S-2018-236880-1500 de 30 de abril de 2018, se ofició al Instituto de Tránsito de Boyacá para que informara si el deudor se encontraba inscrito como propietario de vehículos automotores¹⁷. Y con oficio con radicado interno No. E-2018-242671-1500 de 10 de mayo de 2018, el Instituto de Tránsito de Boyacá informó que el deudor no aparecía registrado como propietario de vehículos¹⁸.

Que el día 19 de noviembre de 2018 se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó una cuenta bancaria del deudor en estado normal¹⁹.

⁷ Folio 26

⁸ Folio 27

⁹ Folio 28

¹⁰ Folio 29

¹¹ Folios 31 a 34

¹² Folios 36 a 37

¹³ Folio 40

¹⁴ Folios 41 a 78

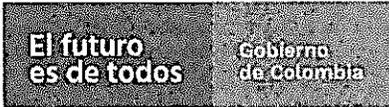
¹⁵ Folio 79

¹⁶ Folio 81

¹⁷ Folios 82 a 83

¹⁸ Folio 84

¹⁹ Folio 85



Que con auto No. 232 de 13 de noviembre de 2018, se decretó el embargo de los productos bancarios que se encontraran a nombre del señor Álvarez Rincón limitando la medida a un MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS (\$1.700.000) M/CTE²⁰.

Que mediante oficio radicado bajo el No. S-2018-682519-1500 de 19 de noviembre de 2018, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo, información referente si el deudor se encontraba registrado como propietario de bienes inmuebles²¹.

Que mediante oficio radicado bajo el No. S-2018-6826173-1500 de 19 de noviembre de 2018, enviado por correo certificado, se solicitó a Bancolombia, el embargo de los dineros de las cuentas en que el ejecutado fuera titular²².

Que mediante Auto No. 306 de fecha 28 de diciembre de 2018, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, y CIFIN²³.

Que la Resolución No. 092 de 04 de noviembre de 2015 "por medio de la cual se dicta una sentencia dentro de un proceso administrativo de cobro coactivo", fue notificada por aviso – publicación en la página web del ICBF- el día 24 de enero de 2019²⁴.

Que mediante Auto No. 003 de 25 de enero de 2019, se liquidó el crédito de la obligación a cargo de JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN²⁵.

Que el día 31 de enero de 2019 se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó una cuenta bancaria del deudor en estado SVOL²⁶.

Que con oficio radicado bajo el número S-2019-050543-1500 de 31 de enero de 2019, se ofició al Instituto de Tránsito de Boyacá para que informara si el deudor se encontraba inscrito como propietaria de vehículos automotores²⁷. Y con oficio con radicado interno No. E-2019-058515-1500 de 06 de febrero de 2019, la citada entidad informo que el deudor no aparecía registrado como propietario de vehículos²⁸.

Que se realizó consulta en RUES – Registro único empresarial y social cámaras de comercio- sobre información de registro mercantil en las cámaras de comercio del deudor, sin que retornara resultado alguno²⁹.

El Auto No. 003 de 25 de enero de 2019, por medio del cual se liquidó el crédito de una obligación, fue notificado por aviso – publicación en la página web del ICBF- el día 28 de febrero de 2019³⁰.

Que reposa en el expediente certificación proferida por el Coordinador del Grupo Financiero, donde se informó el valor de la deuda, a 14 de mayo de 2019, ascendía a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE por concepto de capital³¹.

²⁰ Folio 86

²¹ Folio 87

²² Folio 88

²³ Folio 93

²⁴ Folio 95

²⁵ Folio 99

²⁶ Folio 103

²⁷ Folios 104 a 105

²⁸ Folio 107

²⁹ Folio 106

³⁰ Folios 108 a 110

³¹ Folio 113

CONSIDERANDO

Que la Ley 1066 de 2006 *"por la cual se dictan Normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones"* en su artículo 5, establece la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas e indica que el procedimiento de cobro coactivo será el contemplado en el Estatuto Tributario.

Que el artículo 828 del Estatuto Tributario y el 99 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecen los títulos que prestan mérito ejecutivo a favor de la administración.

Que la prescripción constituye una de las formas de extinción de las obligaciones por el paso del tiempo sin que se haya logrado el pago de la acreencia. Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C 895 de 2009 la ha definido en los siguientes términos: *"La prescripción extintiva o liberatoria es la institución jurídica por medio de la cual se pone fin a un derecho y a la correspondiente obligación, como consecuencia del paso del tiempo y de la pasividad de su titular en, exigirlo por los cauces previstos en el ordenamiento, y halla sustento en los principios de seguridad jurídica, orden público y paz social."*

Que el Consejo de Estado³² indicó: *"la Sala considera que cuando los servidores públicos encargados de las funciones de cobro coactivo estén en presencia de obligaciones cuya fuente sea un acto administrativo, están en el deber legal de analizar si ese acto ha perdido fuerza ejecutoria, como se explicó en extenso en el concepto No. 1552 de 2004 (...). En los demás casos, es decir, en aquellos en que la obligación esté contenida en otro tipo de documentos, por ejemplo, en aquellos que provengan del deudor, la viabilidad de iniciar el proceso de cobro coactivo dependerá de la ocurrencia o no de la figura de la prescripción extintiva del derecho,³³ prevista en el Código Civil y, cuando así lo prevea el legislador, como en el caso, de la prescripción de obligaciones de origen tributario"*.

A su vez en sentencia de 02 de Julio de 2015³⁴ estableció: *"en relación con la prescripción de la acción de cobro, la Sala reitera que de la lectura de los artículos 817 y 818 del E. T. se desprende que la obligación de la administración no solo es iniciar la acción de cobro coactivo dentro de los cinco años siguientes a que la obligación se hizo exigible, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal, pues « ... detrás del término de prescripción de la acción de cobro coactivo hay poderosas razones de seguridad jurídica tanto para la administración como para los contribuyentes. Para la administración porque debe existir siempre un momento definitivo en el que se consoliden los actos administrativos que expide en el procedimiento de cobro coactivo. Y para los contribuyentes, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo» "*.

Que el Código Civil en el Título XIV y Capítulo III al regular el modo de extinguir las obligaciones, consagra en sus artículos 1625 y 2535 la figura de la prescripción, la cual se genera por un *lapso de tiempo* sin que se hayan realizado acciones. Y el artículo 2536 indica que la acción ejecutiva se prescribe por cinco años y la ordinaria por diez.

³² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente Gustavo Aponte Santos. Sentencia de 19 de junio de 2008, Rad. 11001-03-06-000-2008-00040-00(1904)

³³ Código Civil. "Artículo. 2512.- La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales."

"Artículo. 2535.- La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones."

³⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Sentencia de 02 de julio de 2015, Rad. 00243 (19500)



Que según la Resolución 384 de 2008 "por la cual se adopta el reglamento interno de recaudo de cartera" concordante con la Resolución 2934 de 2009 "por la cual se expide el Manual de Cobro Administrativo Coactivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", el proceso administrativo por jurisdicción coactiva se podrá dar por terminado y en consecuencia se archivará el expediente cuando se advierta que procede la prescripción de la obligación.

Que el Estatuto Tributario, en su artículo 817 determina que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de que se hicieron legalmente exigibles.

Que la Resolución 384 de 2008, en su artículo 58 establece la competencia que tiene el Funcionario Ejecutor para ordenar la prescripción de oficio de las obligaciones que se encuentren en etapa de cobro coactivo, concordante con el inciso del artículo 817 Estatuto Tributario Nacional reglamentado por el Decreto Nacional 2452 de 2015.

Que el artículo 8 de la Ley 791 de 2002 modificó el artículo 2536 del Código Civil, estableciendo la prescripción en cinco (5) años, norma que estuvo vigente del 28 de diciembre de 2002 hasta el 28 de julio de 2006.

Que atendiendo a lo establecido en el artículo 818 ibídem y artículo 57 de la Resolución 384 de 2008, el término de prescripción se interrumpe, en los siguientes casos: "1. Por la notificación del mandamiento de pago (...). A su vez, este artículo preceptúa que, interrumpida la prescripción por la notificación del mandamiento de pago, el término se contabiliza de nuevo a partir del día siguiente de su ocurrencia.

Aplicados estos derroteros en la especie objeto de estudio se tiene que la sentencia de fecha 25 de febrero de 2009 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Viterbo quedó ejecutoriada el día 10 de marzo de 2009³⁵. Evidenciándose entonces, que la prescripción fue interrumpida con la notificación por aviso en la página web del ICBF del mandamiento de pago, realizada a el deudor, el 31 de diciembre de 2013³⁶, sin que obre dentro del expediente el acaecimiento de alguna otra causal de interrupción del término de prescripción.

Por tanto, el término empezó a correr de nuevo desde el día siguiente de su notificación. En consecuencia, se realizaron actuaciones orientadas al impulso procesal del expediente entendidas éstas como investigaciones de bienes sin que arrojaran bienes muebles e inmuebles de propiedad del deudor susceptibles de medidas cautelares. Y que, si bien se identificaron productos bancarios del deudor, la entidad financiera no remitió respuesta alguna. Por tanto, y atendiendo a lo dispuesto en el **parágrafo del artículo 820³⁷ del Estatuto**, al no recibir respuesta, la misma se entenderá negativa.

Además, se agotaron todas las etapas procesales, realizadas de conformidad en el Estatuto Tributario y la Resolución 384 de 2008, que se evidencian dentro del expediente y orientadas a la recuperación de la obligación. Sin embargo, se determina que a la fecha han transcurrido más de cinco (5) años, por lo que la obligación se encuentra prescrita desde el 01 de enero de 2019.

³⁵ Folio 11

³⁶ Folio 26

³⁷ Artículo 820 del Estatuto Tributario: (...) **PARÁGRAFO.** Para determinar la existencia de bienes, la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá adelantar las acciones que considere convenientes, y en todo caso, oficiar a las oficinas o entidades de registros públicos tales como Cámaras de Comercio, de Tránsito, de Instrumentos Públicos y Privados, de propiedad intelectual, de marcas, de registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero para que informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor. **Si dentro del mes siguiente de enviada la solicitud a la entidad de registro o financiera respectiva, la Dirección Seccional no recibe respuesta, se entenderá que la misma es negativa, pudiendo proceder a decretar la remisibilidad de las obligaciones (...).** (subrayado fuera de texto)

Que de conformidad con certificación de 14 de mayo de 2019, proferida por el Grupo Financiero de la Regional Boyacá, se indicó que el señor JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN a la fecha adeuda la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE por concepto de capital.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PRESCRIPCIÓN de la acción de cobro dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado contra **JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 74.302.184**, por la obligación contenida en la sentencia de fecha 25 de febrero de 2009 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Viterbo, que a la fecha asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE por concepto de capital, más los intereses moratorios que se hayan causado a la tasa del 12% anual de conformidad con la normatividad vigente (ley 68 de 1923 artículo 9) y dejados de cancelar.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, DAR POR TERMINADO el proceso administrativo de cobro coactivo número 2009-175 que se adelanta en contra de **JORGE EDUARDO ALVAREZ RINCÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 74.302.184**.

ARTÍCULO TERCERO: LEVANTAR las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso, para el efecto librense los oficios correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al deudor de la decisión acogida en la presente resolución, haciéndole saber que en contra la misma no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto por el artículo 833-1 del Estatuto Tributario.

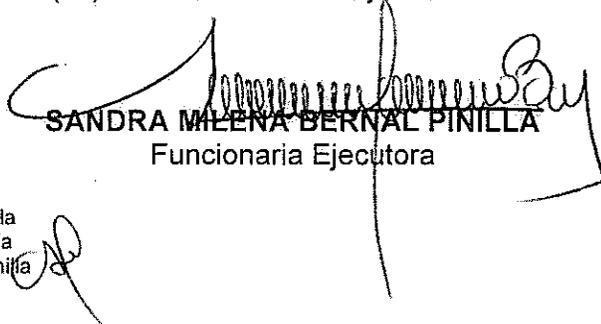
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente Resolución al Grupo Financiero de la Regional Boyacá para que proceda con la cancelación del registro contable correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: ARCHIVARSE el expediente y háganse las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Tunja, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2019


SANDRA MILENA BERNAL PINILLA
Funcionaria Ejecutora

Aprobó: Sandra Milena Bernal Pinilla
Revisó: Sandra Milena Bernal Pinilla
Proyectó: Sandra Milena Bernal Pinilla

472	Motivos de Devolución		1 2	Desconocido	1 2	No Existe Número		
			1 2	Rehusado	1 2	No Reclamado		
			1 2	Cerrado	1 2	No Contactado		
			1 2	Fallecido	1 2	Apartado Clausurado		
Dirección Errada		1 2	Fuerza Mayor					
No Reside								
Fecha 1:	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	R	D
Nombre del solicitante: DR. LEONARDO REYES				Nombre del distribuidor:				
C.C. cc 74302051				C.C.:				
Centro de Distribución: Sta. Rosa de los Andes				Centro de Distribución:				
Observaciones: no está nombrado				Observaciones: va por vereda				



@icbfcolumbiaoficial

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080